



RESUMEN Y PROSPECTIVA

- El 30 de mayo, fuerzas federales y estatales ingresaron al municipio Frontera Comalapa, Chiapas, con el objetivo de reestablecer el orden tras una semana de fuertes enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. Aunque el despliegue tuvo efectos positivos inmediatos, identificamos resistencia de parte de pobladores de una de sus comunidades, el Ejido Joaquín Miguel Gutiérrez. En el corto plazo, es previsible que la presencia de autoridades genere tensiones con grupos amplios de pobladores que podrían evolucionar en ataques o enfrentamientos en su contra (especialmente si salen a la luz casos de abuso por parte de las autoridades).
- Lantia Intelligence identifica que la presencia en los municipios de grupos mafiosos (organizaciones criminales con influencia regional, ya sea que formen parte de un cártel o trabajen de forma independiente), como Los Salazar o Los Cuinis, implica un mayor nivel de víctimas de “levantamientos” en comparación con aquellos municipios donde estas organizaciones no tienen presencia. Identificamos al menos una víctima de levantamiento en 284 municipios del país y la presencia de 20 organizaciones criminales en 635 municipios, y determinamos (con un nivel de confianza del 95%) que la presencia de ocho grupos implica un mayor número de personas “levantadas”: Cártel de Santa Rosa de Lima, Cártel de Sinaloa, Cártel del Noreste, Cártel de Jalisco Nueva Generación, La Línea, Los Cuinis, Los Salazar, y Los Zetas Vieja Escuela.
- Tras el despliegue de 50 lonas en distintos puntos de Michoacán que advertían la conformación de un nuevo grupo de autodefensa llamado “Guardia por la paz” en mayo, esta semana el Cártel Jalisco Nueva Generación publicó un video donde afirma que no se trata de un grupo de autodefensa sino de un grupo criminal. En particular, apunta a una alianza entre diversas células armadas como Los Viagras, El Botox, El Barbas, El Tene, Migueladas y El Previto, con presencia en varios municipios de Michoacán. En efecto, “Guardia por la Paz” es un grupo de autodefensa creado para encubrir actividades delictivas al tiempo que busca conformar una base de apoyo social. En este caso, es probable que Miguel Ángel Gallegos Godoy (a) “Migueladas” esté detrás de esta estrategia pues tiene un largo historial en cuanto a infiltración de grupos de autodefensa. Ante esta situación, se espera que el CJNG realice ataques violentos para quebrantar las alianzas entre células armadas rivales en el mediano plazo.

- A partir del martes 23 de mayo (cuando se presentaron las primeras denuncias por la desaparición de trabajadores de un call center en Zapopan), comenzaron a conectarse hechos y evidencias que señalan la relación de tales desapariciones con un negocio criminal de fraudes y extorsiones vinculado a la venta de tiempos compartidos (dado a conocer en abril de este año por una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos). En este esquema participan empresas vinculadas con una célula del CJ-NG. Las evidencias encontradas en los cateos realizados a los dos predios donde operaba el call center confirman esta conexión. La decisión extrema de asesinar y desaparecer a ocho jóvenes trabajadores de esa oficina, es un modus operandi del crimen organizado (hasta hoy han sido identificados los restos de dos cuerpos). La diversificación y sofisticación del crimen organizado en México demanda una gran capacidad de investigación y persecución por parte de las autoridades, cada vez bajo mayor presión por los escasos resultados alcanzados.
- El 28 de mayo Sergio Emmanuel Martínez Covarrubias, subdirector de Operación Aduanera de Manzanillo, Colima, fue secuestrado por un comando armado. Su cuerpo se encontró un día después en la carretera Manzanillo-Cihuatlán. Martínez Covarrubias llevaba dos semanas en el cargo, luego de que la Secretaría de la Marina (Semar) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) acordaron devolver las tareas aduaneras a civiles, por lo que es altamente probable que el crimen haya sido perpetuado por algún grupo de la delincuencia organizada para exhibir sus capacidades.
- El 22 de mayo fueron hallados los cadáveres de dos jóvenes en Guasave, Sinaloa, con signos de violencia. Familiares acusaron a elementos de la Secretaría de Marina de haber perpetrado los asesinatos. La SEMAR alegó tener evidencia de que sus miembros no habían estado presentes en la zona donde estaba el supuesto retén y denunció el uso apócrifo de uniformes de la organización por parte del crimen organizado. El incidente está siendo investigado por la fiscalía del Estado y la CNDH. Este caso podría resultar en una crisis institucional como producto de la penetración del crimen organizado en las filas de la SEMAR, ya sea mediante la cooptación o la suplantación de identidad. Guasave es uno de los municipios más violentos del estado y la mayoría de las víctimas están en el mismo rango de edad que las de este caso.
- El 30 de mayo registramos un enfrentamiento entre la Fuerza Civil de Nuevo León y un comando armado en la autopista que va de Monterrey a Nuevo Laredo, a la altura del municipio Salinas Victoria con un saldo fue de diez agresores muertos y cuatro policías lesionados (uno por un disparo y tres tras una volcadura del vehículo en el que viajaban). De un análisis de la violencia reciente, se advierte del riesgo de violencia e inseguridad en las carreteras 85, 85D y local 1 de Nuevo León. En el corto plazo es altamente probable que los episodios de violencia en estos municipios de Nuevo León vuelvan a ocurrir: la “carretera de la muerte” a Nuevo Laredo continuará siendo un espacio inseguro para los transeúntes y atractivo para el crimen organizado.

ANÁLISIS



Militares toman el control de Frontera Comalapa, Chiapas; prevalece un ambiente de tensión

RIESGO SOCIAL

El 30 de mayo, un contingente del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal ingresó a la fuerza al municipio Frontera Comalapa, Chiapas, con el mandato de reestablecer el orden tras una semana de fuertes enfrentamientos entre grupos criminales, miles de personas desplazadas y un número aún indeterminado de víctimas letales. En particular, identificamos una fuerte resistencia por parte de pobladores del Ejido Joaquín Miguel Gutiérrez, quienes se enfrentaron a las fuerzas de seguridad para impedir que éstas liberaran los bloqueos que ellos instalaron, aparentemente, con el objetivo de impedir el ingreso de grupos criminales a su comunidad.

- Una semana antes, entre el 23 y el 25 de mayo, se registraron fuertes enfrentamientos entre comandos armados en este municipio. De acuerdo con testimonios de los habitantes, la intensidad de los enfrentamientos les impidió salir de sus casas. Inclusive, de acuerdo con testimonios recolectados en medios de comunicación, las autoridades solo dieron unos breves minutos para salir a comprar víveres.
- Además, en el contexto de enfrentamiento, grupos criminales efectuaron reclutamiento forzoso de los habitantes de Frontera Comalapa; los que debieron sumarse a las filas de uno o ambos grupos beligerantes para combatir a sus enemigos. También allanaron decenas de casas para utilizarlas como cuarteles (mandos del Ejército solicitaron a los pobladores que retornaban a sus domicilios a ingresar con cuidado, pues en ellas había registro de aparatos explosivos).
- El contexto severo de violencia ocasionó un desplazamiento forzado de aproximadamente de 2 mil personas hacia otras poblaciones en el municipio y, de acuerdo con información disponible, algunos de estas comunidades permanecieron completamente deshabitadas durante varios días —aunque también es posible que algunas personas permanecieran ahí, pero escondidas (por ejemplo, los ganaderos en estas comunidades deben continuar alimentando a su ganado).
- El ingreso de las fuerzas de seguridad parece haber retornado cierta tranquilidad a los pobladores los que, incluso, fueron entrevistados por múltiples medios (en su mayoría, agradecieron la presencia y señalaron que ya pudieron transitar por las calles y regresar a sus domicilios).

El enfrentamiento de las autoridades con los pobladores del Ejido Joaquín Miguel Gutiérrez aparentemente ocurrió porque estos últimos consideraron que las autoridades no garanti-

zaban su seguridad y, por lo tanto, éstos tuvieron que defenderse personalmente de los criminales.

- Es claro que autoridades chiapanecas han hecho caso omiso a las peticiones de seguridad por parte de los pobladores durante varios años (a pesar de las constantes agresiones, secuestros y homicidios registrados). En este sentido, es natural que los habitantes muestren gran recelo de abrir sus puertas después de varios años de transgresiones y abandono.
- No obstante, tomando en consideración casos semejantes en todo el país, no se descarta que exista interés por parte de algunos de los pobladores de impedir el ingreso de autoridades, pues esto implicaría la pérdida de sus patrocinadores criminales, directos e indirectos. Es probable que buena parte de sus ingresos dependa de la presencia de estos grupos: [a] pagos ilícitos para su protección; o [b] ingresos por la derrama económica derivada de su presencia. Es relevante también el grado de marginación municipal, pues en el municipio registra un alto grado de pobreza extrema, con 26.8 por ciento, y de pobreza moderada, con 50.8 por ciento.
- Es probable que ésta y otras comunidades no tomen a bien la presencia a mediano o largo plazo de las autoridades e, inclusive, ésta podría detonar en ataques o enfrentamientos en caso de que se identifiquen abusos o represiones en su contra.

Ciertamente, en Chiapas se ha hecho énfasis desde hace varios años acerca del enérgico despliegue de fuerzas federales, Ejército y Guardia Nacional, para impedir el tráfico de migrantes y de drogas procedentes de América Central —especialmente durante la presidencia de López Obrador, como respuesta a las presiones estadounidenses bajo el mandato de Donald Trump (2016-2020) y Joe R. Biden (2020-actualmente). Sin embargo, el despliegue es diferenciado y no todas las regiones fronterizas reciben la atención que requieren.

- Aunque también se ha enumerado el combate al tráfico de drogas como prioridad de las fuerzas federales en la zona, el despliegue muestra más bien un enfoque centrado, casi absolutamente, en el tráfico de migrantes. Lo anterior explica que la presencia de fuerzas federales sólo se concentre en Tapachula y a lo largo del corredor Costa (desde Tapachula y hasta Arriaga, que corre por la carretera Federal 200), pero el resto del estado permanece desprotegido.
 - La posibilidad de detener a migrantes en esta zona es alta, toda vez que: [1] en ella se concentra el fenómeno de caravanas de migrantes (cualquier operativo resulta en cientos de detenidos); [2] sólo se utiliza una carretera (todas transitan por la Federal 200); y [3] su detención no implica riesgo alguno (las personas que utilizan este método no cuentan con protección criminal).
 - Por el contrario, otras zonas de mayor riesgo —entre éstas, Frontera Comalapa—, prácticamente no reciben a fuerzas de seguridad. Esto se debe a que: [1] El número de migrantes que transita por esta zona es mucho inferior; [2] cuentan con prote-

cción criminal, social o política; [3] resulta sumamente complicado mantener vigilancia en cientos de caminos y veredas en los que, además, los vehículos que transportan a migrantes los mantienen ocultos.

- Lo anterior aplica también para el tráfico de drogas. Aunque en Tapachula existen fuertes controles que impiden su introducción a México, en el resto de la frontera es sumamente sencillo introducirlas y transportarlas.

En suma, la zona en la que se encuentra Frontera Comalapa es estratégica para grupos criminales que desean introducir drogas a México procedentes de América Central. En este sentido, en el municipio y la región Lantia Intelligence identifica presencia y actividades de cinco organizaciones criminales: [1] el Cártel Jalisco Nueva Generación; [2] Cártel de Sinaloa (éstos dos, los supuestos responsables de la violencia reciente); [3] Los Motonetos; [4] La Banda del Poni; y [5] Autodefensa Pueblo Cansado.



El número de víctimas de levantamientos en municipios aumenta con la presencia de grupos mafiosos como Los Salazar

ANÁLISIS LANTIA INTELLIGENCE

Lantia Intelligence realizó un análisis de estadística inferencial respecto al vínculo que existe entre los levantamientos (secuestros cuya finalidad no es obtener un beneficio económico) registrados en los últimos dos años (2021 y 2022) a nivel municipal y las 20 organizaciones con mayor presencia a lo largo del país. Los principales hallazgos fueron los siguientes:

- Se registraron un total de 1,347 levantamientos, de las cuales dos de cada 10 son de mujeres. Se identificó al menos una víctima en 284 municipios del país. El 28.9% de los levantamientos se concentra en nueve municipios: Cuauhtémoc (Chihuahua); Othón P. Blanco y Benito Juárez (Quintana Roo); Culiacán (Sinaloa); Caborca, Cajeme, Guaymas y Hermosillo (Sonora); y Fresnillo (Zacatecas).
- Detectamos la presencia de al menos una organización criminal en 809 municipios del país. Las 20 organizaciones que figuran en más municipios a lo largo del país (635 municipios) son las siguientes: Cártel de Santa Rosa de Lima, Cártel de Sinaloa, Cártel de Tepalcatepec, Cártel del Noreste, Cártel del Sur, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cárteles Unidos, Guardia Michoacana, Guerreros Unidos, La Línea, La Nueva Empresa, La Nueva Familia Michoacana, La Unión Tepito, Los Cuinis, Los Maldonado, Los Metros, Los Rojos, Los Salazar, Los Viagra, y Los Zetas Vieja Escuela.
- Es posible determinar, con significancia estadística, que la presencia de ocho organizaciones criminales implica un mayor número de levantamientos en los municipios en los que figuran en comparación con aquellos municipios donde no se encuentran. Dichas organizaciones son Cártel de Santa Rosa de Lima, Cártel de Sinaloa, Cártel del Noreste, CJNG, La Línea, Los Cuinis, Los Salazar, y Los Zetas Vieja Escuela.

- Resaltan con los más altos coeficientes de incidencia Los Salazar (grupo subordinado al Cártel de Sinaloa), este grupo criminal tiene presencia en 29 municipios, en los cuales se ha registrado 325 levantamientos, es decir, un promedio de 11.2 víctimas por municipio. También sobresalen Los Cuinis (grupo subordinado al CJNG), quienes han estado activos en siete municipios, donde se han registrado 76 levantamientos, lo que implica un promedio de 10.9 víctimas por municipio. A diferencia del CJNG, con presencia en 351 municipios, en los cuales se ha registrado 621 levantamientos, es decir, 1.8 víctimas en promedio; el Cártel de Sinaloa tiene actividades en 97 municipios, en los cuales se ha reportado un total de 373 levantamientos (3.8 en promedio por municipio)

20 Organizaciones Criminales con Mayor Presencia en el País

Organización Criminal	Número de Municipios con Presencia	Número de Levantados en Municipios con Presencia	Promedio de Levantados por Municipio	Relación Positiva y Estadísticamente Significativa*
Cártel de Santa Rosa de Lima	29	69	2.4	Sí
Cártel de Sinaloa	97	373	3.8	Sí
Cártel de Tepalcatepec	33	11	0.3	
Cártel del Noreste	35	123	3.5	Sí
Cártel del Sur	27	26	1.0	
Cártel Jalisco Nueva Generación	351	621	1.8	Sí
Cárteles Unidos	50	38	0.8	
Guardia Michoacana	31	11	0.4	
Guerreros Unidos	37	34	0.9	
La Línea	29	112	3.9	Sí
La Nueva Empresa	106	73	0.7	
La Nueva Familia Michoacana	56	32	0.6	
La Unión Tepito	25	5	0.2	
Los Cuinis	7	76	10.9	Sí
Los Maldonado	25	8	0.3	
Los Metros	33	43	1.3	
Los Rojos	48	53	1.1	
Los Salazar	29	325	11.2	Sí
Los Viagra	72	37	0.5	
Los Zetas Vieja Escuela	83	140	1.7	Sí

Nota (*): Se emplea Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios, nivel de confianza de los coeficientes por lo menos del 95%.



Grupo de autodefensas “Guardia por la paz” encubre estrategia de grupos rivales del CJNG en Michoacán

DINÁMICA CRIMINAL

El lunes 22 de mayo fueron desplegadas 50 lonas que anunciaban la supuesta conformación de un nuevo grupo de autodefensas llamado “Guardia por la paz” en municipios como Lombardía, Zamora, Tangancícuaro y Apatzingán. En respuesta, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez, minimizó la aparición de este grupo. En realidad, desde hace una década que grupos criminales hacen uso de supuestos grupos de autodefensa para encubrir actividades delictivas al tiempo que buscan conseguir apoyo social. Por esta razón, es muy probable que la conformación de la “Guardia por la Paz” se enmarque en una estrategia criminal para generar una alianza en contra del Cártel Jalisco Nueva Generación. A manera de ilustración de este fenómeno, cabe recordar que en junio de 2021, criminales emplearon a un supuesto grupo de autodefensas “Pueblos Unidos” para operar en los municipios de Ario de Rosales, Nuevo Urecho, Salvador Escalante y Taretan (posteriormente fueron desarmados).

De manera paralela, voceros del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) desconocieron la existencia de esta “Guardia por la Paz”. Advirtieron que las únicas corporaciones autorizadas en comunidades purépechas, mazahuas o nahuas son las Rondas Comunitarias o Kuarichas. Incluso denunciaron que el 12 de mayo pasado, un grupo armado ingresó a la comunidad de Ocumicho, desarmó a la ronda comunal y amenazó a las autoridades locales. Este sería un indicio de un escenario en que grupos criminales generen violencia para desestabilizar los autogobiernos locales de Ocumicho, Turícuaro, San Benito, Zacán, Jarácuaro, San Francisco Peribán, Nuevo Zirosto y San Matías el Grande y así infiltrar grupos de autodefensas al servicio del crimen organizado.

Por su lado, esta semana el CJNG publicó un video en donde advirtió que este supuesto grupo de autodefensa no es más que una alianza entre distintas células armadas como Los Viagras, El Botox, El Barbas, El Tene, Migueladas y El Previto, a quienes acusaron de extorsionar a comerciantes locales. En este video acusaron principalmente a Los Viagras, agrupación relacionada con los Cáteles Unidos, con la que el CJNG mantiene conflictos violentos. Recientemente, esta rivalidad ha generado conflictos violentos de alto impacto en municipios de Buenavista, Tepalcatepec y Uruapan. Los Viagras (grupo escindido del CJNG) mantiene una estrategia de contención de la expansión territorial del CJNG desde el oriente de la entidad. Al parecer, Los Viagras mantienen una alianza con el Cártel de Sinaloa, grupo criminal que provee de recursos materiales y financieros.

En particular, la estrategia de generar un supuesto grupo de autodefensa para encubrir actividades criminales podría ser operada por Miguel Ángel Gallegos Godoy “Migueladas.” Este sujeto tiene una larga experiencia en infiltración de grupos de autodefensa para emplearlos al servicio del crimen organizado. Gallegos Godoy ha sido señalado por operar las

autodefensas en la Huacana y Múgica. Hace años que Gallegos se convirtió en un sólido líder regional y el principal soporte financiero de Los Templarios. Aunque su liderazgo se ha visto menguado en años recientes, mantiene una alianza con Los Viagras y continúa operando una red de extorsión y de venta de drogas sintéticas relevante.

De hecho, en el video publicado por el CJNG de esta semana, Gallegos Godoy figura como un objetivo prioritario, al igual que los hermanos Sierra Santana, conocidos como "Los Viagras" y un sujeto conocido como "El Tena". Ante este escenario, es probable que el CJNG reactive una expansión territorial en las próximas semanas en contra de la alianza criminal de Cártels Unidos. Esperamos que el CJNG genere ataques violentos con el objetivo de quebrantar las alianzas entre células armadas rivales en el mediano plazo. Debido al fuerte arraigo que tienen ciertas células armadas a nivel local, la violencia generada por estos conflictos tendrá una fuerte afectación en contra de la población civil.



La desaparición de ocho trabajadores de un call center en Zapopan confirma la participación del CJNG en fraudes relacionados con la venta de tiempos compartidos en Jalisco

RIESGO DE SEGURIDAD

A partir del martes 23 de mayo comenzó a difundirse en medios de comunicación la desaparición de jóvenes trabajadores de un call center de Zapopan. Las denuncias ante la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) se presentaron a partir de ese día hasta completar un total de ocho personas, de acuerdo con el siguiente orden:

- En el primer reporte presentado la mañana del martes 23 ante la FEDPD quedó asentada la desaparición de los hermanos Itzel Abigail y Carlos David Valladolid Hernández, de 27 y 23 años. En una segunda denuncia, se reportó la desaparición de Carlos Benjamín García Cuevas, de 31 años, en fuentes abiertas se menciona que esta persona habría invitado a los demás a laborar, aunque su familia dijo en una primera instancia que éste se dedicaba a un negocio familiar. El día 24 se denunció la desaparición de Jesús Alfredo Salazar Ventura, de 37 años y Arturo Robles Corona, de 30 años, quienes según familiares tenían al menos tres meses laborando para la empresa. El 26 de mayo la de Mayra Karina Velázquez, quien estuvo relacionada con una investigación de fraude en 2016. El 27 de mayo se presentó denuncia de los familiares de Jorge Miguel Moreno Morales, y el día 28 la de Juan Antonio Estrada de 34 años.

La información de las cédulas de búsqueda sobre el momento de las desapariciones, señala que en el caso de Carlos Benjamín García fue desde el sábado 20 de mayo, y el resto de las personas registran la mañana del día lunes 22 de mayo, uno de ellos reportó que ya había llegado a la oficina. La Fiscalía del estado señaló que tres de ellos habrían sido privados de la libertad por un comando armado. En fuentes abiertas se menciona que uno de los jóvenes desaparecidos es de ciudadanía estadounidense. Producto de las investigaciones realiza-

das por las autoridades estatales, se detectaron dos predios a donde acudían a laborar los jóvenes, los cateos realizados por la Fiscalía del estado el 25 y 27 de mayo arrojaron lo siguiente:

- El primer cateo se hizo a una vivienda ubicada en la calle Víctor Hugo 158, en la colonia Jardines Vallarta. Se localizaron marihuana, un trozo de tela y un trapeador con manchas rojizas; cinchos de plástico, documentos, pizarrones con anotaciones de nombres de personas de nacionalidad extranjera, datos de membresías a tiempos compartidos, y metas económicas a lograrse. La finca no cuenta con licencia comercial. Fue rentada desde noviembre de 2022, a través de una Consultoría Jurídica representada por “César Javier N”. quien está relacionado con dos investigaciones por fraude cometidos en 2014 y 2015. El arrendatario fue identificado como “Luis Enrique” quien es buscado para que comparezca ante el Ministerio Público.
- El segundo cateo se llevó a cabo en una finca localizada en Johannes Brahms 260, colonia La Estancia. Se encontraron listados de nombres y datos de contacto; pizarrones con nombres de personas extranjeras y metas económicas; una bolsa y un vaso de plástico con vegetal verde; una máquina para contar billetes; discos duros y memoria USB; equipos de cómputo que en su mayoría presentaban ausencia del CPU; cables trozados; un rack sin el equipo propio para almacenar información; diversas identificaciones y tarjetas departamentales; y anotaciones de diálogos prediseñados en inglés para hacer abordaje telefónico a personas extranjeras. Por estos indicios la línea de investigación se orienta hacia el cobro de deudas hipotecarias a personas extranjeras y a ofrecer tiempos compartidos en hoteles.

El jueves 25 de mayo amigos y familiares de cinco de los trabajadores desaparecidos, realizaron una marcha para exigir a la autoridad avances en la investigación y la localizados con vida de los desaparecidos. El contingente de aproximadamente 150 personas partió de la glorieta de los Niños Héroes rumbo a Casa Jalisco. Durante esta marcha se comentó que a los jóvenes los tenían amenazados desde hace mucho tiempo y que tenían información de su familia, así que sabían que debían guardar silencio para poder trabajar. De acuerdo con comentarios de las madres de familia, sus hijos se dedicaban a cobrar deudas de personas que tenían hipotecas vencidas. Estas marchas se repitieron el día viernes 2 de junio. Los familiares de los desaparecidos han negado reiteradamente que las actividades que desarrollaban los jóvenes estuvieran vinculadas a temas de drogas o de fraude telefónico.

- El gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro confirmó que la operación de los call center está siendo investigada por la Fiscalía del estado, gobierno federal y el gobierno de Estados Unidos, y señaló que tienen mucha información para pensar que no era un call center, sino un centro donde se hacían otro tipo de actividades.
- La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez confirmó desde Palacio Nacional que de acuerdo con los primeros indicios sí se trata de personas que estaban realizando fraudes inmobiliarios y algún tipo de extorsiones telefónicas.

- El jueves 31 de mayo producto de las investigaciones, la Fiscalía de Jalisco reportó el hallazgo de 45 bolsas de plástico en una barranca de la colonia Mirador Escondido en la zona de Tempisque en Zapopan. En las declaraciones del Fiscal del estado, Luis Joaquín Méndez Ruíz, señala que algunos de estos restos corresponden a las características de los jóvenes desaparecidos, sin embargo, será el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) quien emita en su momento los dictámenes correspondientes que confirmen la identidad de los cuerpos. Hasta el domingo 4 de junio aún no se conocían estos dictámenes.
- De manera extraoficial los familiares de Juan Antonio Estrada, señalaron que la Fiscalía les había confirmado que los restos encontrados correspondían con los del joven. Además, el colectivo Por Amor A Ellxs, formado por familiares de personas desaparecidas en Jalisco, confirmó la localización sin vida en la barranca de Zapopan de Arturo Robles Corona el día sábado 3 de junio.
- El sábado 3 de junio por la tarde tuvo lugar un nuevo hallazgo de restos humanos en el cruce de las calles Agua Fría y 16 de septiembre, en la colonia Miguel Hidalgo de Zapopan, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses procedió a llevarse la evidencia y determinar si están vinculados con el caso de los jóvenes del call center.

Hipótesis que vinculan este caso con el CJNG

- La relación entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el call center donde desaparecieron ocho personas en Zapopan, es la principal línea de investigación que sigue la Fiscalía del estado de Jalisco, ya que existen antecedentes sobre un esquema de fraudes a través de la compra y venta de tiempos compartidos en las que participan varias empresas vinculadas con una célula de este grupo.
- El 27 de abril de 2023, una red de fraudes fue denunciada por el Departamento del Tesoro en Estados Unidos, misma que podría tener relación con lo antes mencionado.
- De acuerdo con la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), una de las figuras centrales en este esquema es Eduardo Pardo Espino, quien encabeza una red de casi una veintena de empresas, y otros operadores (Brayan Moisés Luquin Rodríguez y Horacio Edmundo Lelo de Larrea Ventimilla).
- Eduardo Pardo es señalado por tráfico de metanfetamina y se encuentra en la mira de las autoridades estadounidenses, ya que a través de la red de empresas se realizan pagos a al menos tres mandos del cártel: Julio César Montero Pinzón (a) El Tarjetas; Carlos Andrés Rivera Varela (a) La Firma; y Francisco Javier Gudiño Haro (a) La Gallina, narcotraficantes y líderes del CJNG denunciados por las propias autoridades de Estados Unidos en abril de 2021, y quienes operan desde Puerto Vallarta.

- De acuerdo con el Buró Federal de Investigación (FBI), solo en 2022 hubo al menos 600 víctimas, la mayoría de ellas personas de la tercera edad originarias de Estados Unidos y Canadá, lo que ha dejado ganancias para el cártel por casi 40 millones de dólares.

Cifras de desapariciones en Jalisco y Zapopan

- En cuanto a la problemática de desapariciones, en México se registran más de 110 mil personas desaparecidas, de ellas, Jalisco tiene 14 mil 979 personas, ocupando el primer lugar nacional, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). El municipio de Guadalajara ocupa el primer lugar con 5,262 personas y Zapopan el segundo lugar con 3,978 personas.

Prospectiva en el corto plazo

- Ante hallazgos de nuevos restos humanos en otra zona de Zapopan, consideramos que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses demorará toda la próxima semana en la emisión de sus dictámenes de identificación. Hasta entonces es previsible que la autoridad no emita mayor información sobre el tipo de actividades que se desarrollaban en estas oficinas, para evitar caer en acusaciones de revictimización.
- Una vez concluida esta fase, deben comenzar a darse los detalles de las investigaciones en curso, donde pese a la desaparición de los posibles testigos, hay elementos de prueba para obtener resultados positivos y concluir con la detención de los culpables involucrados en esta red criminal.
- La decisión del grupo criminal revela que el costo de eliminar a todas las personas involucradas era menor que el derivado de su posible testimonio contra mandos superiores. También es posible que la orden de exterminio se haya dado por detectarse infiltración o traición en la operación de la célula. En este cálculo resalta la afectación que, sin duda, tendrán para continuar en el futuro con este segmento de negocios.
- Es previsible que la línea de investigación de las autoridades norteamericanas, contribuya decisivamente para conocer el fondo del asunto, por existir denuncias de fraude de ciudadanos de ese país.
- El riesgo más importante en esta situación es que las investigaciones concluyan en que está ligada al crimen organizado, pero sin llegar a los culpables.



Asesinato del subdirector de Operación Aduanera en Manzanillo, Colima pone en evidencia los grandes peligros que acechan a los agentes aduanales en los principales puertos y puntos de revisión

RIESGO DE SEGURIDAD

El pasado 28 de mayo, con sólo dos semanas en el cargo, Sergio Emmanuel Martínez Covarrubias, subdirector de Operación Aduanera de Manzanillo, Colima fue secuestrado en un restaurante de dicha ciudad. Al día siguiente fue encontrado muerto en la carretera Manzanillo-Cihuatlán. Cabe recordar que hace también dos semanas, la Secretaría de Marina (Semar) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) acordaron devolver las tareas aduaneras a los civiles, después de que el gobierno federal dejó el control de las aduanas a la Semar en el año 2020, con el objetivo de reducir la corrupción y el contrabando.

Aunque hasta el momento no se ha dado más información sobre el asesinato de Martínez Covarrubias, la presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, declaró que desde hace más de un año había pedido que no se otorgaran estos puestos a civiles por el peligro que implican. Cabe recordar que, en octubre de 2021, otros tres trabajadores de la aduana en este puerto fueron asesinados y sus cuerpos localizados en el municipio de Villa de Álvarez. Asimismo, Martínez Covarrubias acababa de ser transferido de su puesto en el área de Comercio Exterior de la Aduana de Matamoros, Tamaulipas, según la misma municipalidad como parte de una estrategia para que no se ponga en peligro la vida de estos servidores públicos. Incluso mencionó que podría ser víctima de viejas rencillas que arrastraba desde su puesto laboral en Matamoros. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que el homicidio es una respuesta al esfuerzo que el gobierno federal realiza para combatir el tráfico de drogas y el fentanilo.

En ambas declaraciones, autoridades coinciden que el asesinato del subdirector de Operación Aduanera responde a las responsabilidades de su función y no descartan que un grupo de la delincuencia organizada esté detrás de este crimen, aunque no han mencionado a ninguno. Lantia Intelligence identifica al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y sus aliados Los Cuinis, así como al Cartel de Sinaloa que mantiene alianza con La Nueva Familia Michoacana, y el Clan Zheng como los principales operadores de la delincuencia organizada en la entidad y quienes buscan mantener el control del puerto para continuar con sus actividades ilícitas. Su lucha por la hegemonía dejó más de 700 víctimas durante el 2022.

El puerto de Manzanillo es el cuarto más importante de América Latina y despacha más de cuatro millones de contenedores al año por lo que su capacidad y ubicación son clave para las operaciones del crimen organizado, sobre todo porque es la entrada de precursores químicos para la elaboración de fentanilo y otras drogas sintéticas que llegan desde puertos asiáticos. Apenas en abril se decomisaron más de ocho mil kilogramos de metanfetamina líquida concentrada en botellas de tequila que iban a ser exportadas.

El asesinato de Martínez Covarrubias y las declaraciones de autoridades, principalmente las de la alcaldesa de Manzanillo, evidencian los peligros que enfrentan los trabajadores de las aduanas en México. La municipalidad declaró que los trabajadores tienen la opción de alojarse dentro de las instalaciones del puerto para salvaguardar su integridad, lo cual se podría interpretar como que los carteles controlan la zona sin ningún temor a las autoridades. Asimismo, antes de su muerte, Martínez Covarrubias denunció que un directivo de la aduana de Manzanillo le advirtió que no saliera de su casa porque podría “pasarle algo”. Sin que hasta el momento las autoridades hayan ahondado en estos hechos.

Desde que el control de las aduanas y puertos regresó a manos de los civiles, éste es el primer hecho de violencia que se registra. Sin embargo, la violencia continuará en el estado y no se descarta que más hechos violentos en contra de autoridades se presenten en otros puntos preponderantes para el paso de mercancías ilícitas y drogas como muestra de poder por parte del crimen organizado, por lo que el gobierno debería presentar una estrategia coordinada en los niveles municipal, estatal y federal, para manifestar que ninguna de las dependencias públicas y la seguridad de sus trabajadores se encuentra en abandono.



Ejecutan a dos jóvenes en Guasave, Sinaloa; acusaciones contra elementos de la marina; SEMAR denuncia uso de uniformes apócrifos por el crimen organizado

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD

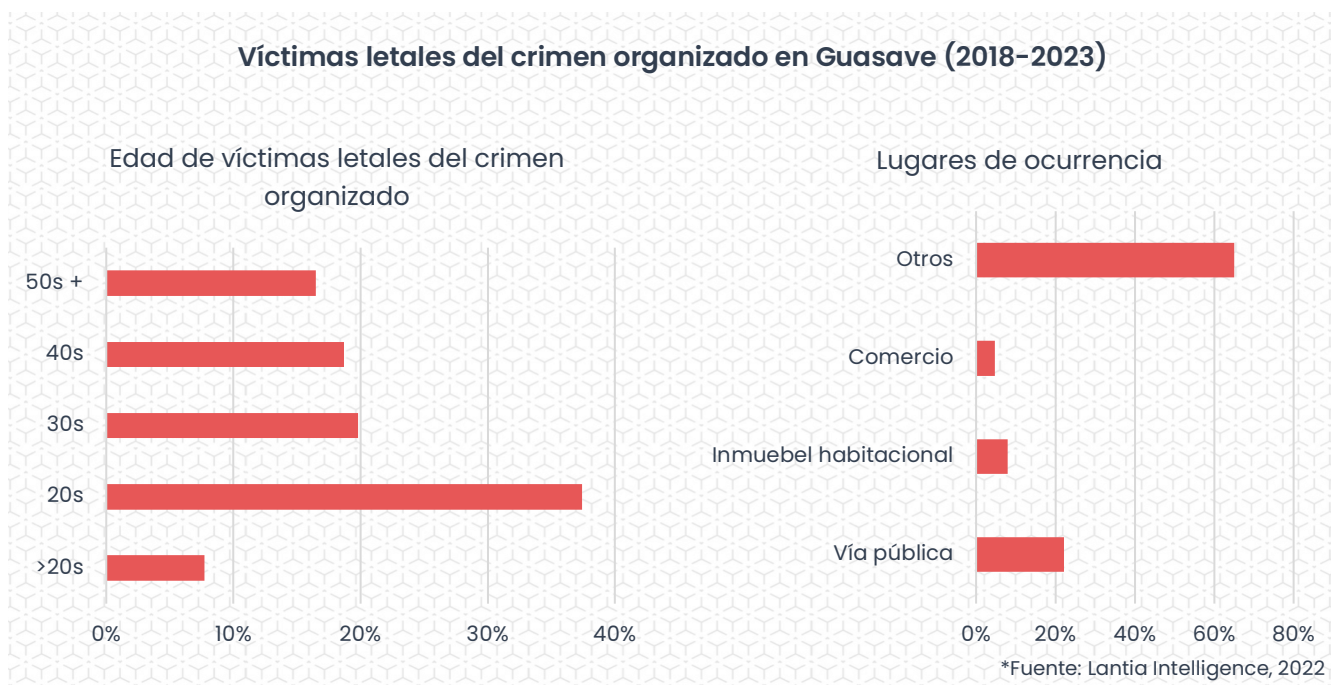
El pasado 22 de mayo, en el poblado de Palos Verdes, ubicado en Guasave, Sinaloa, fueron encontrados los cuerpos desnudos y con evidencia de golpes y balazos de dos jóvenes: Jorge Alfredo Espinoza, de 28 años y Alejandro Guadalupe Castro Urías, de 20 años. Los familiares de Jorge Alfredo reportaron que el finado se comunicó con ellos en la madrugada del incidente para comentar que estaba en un retén de la Marina y que se le había solicitado llamar al otro finado, quien venía de visitar a su novia en la comunidad de Palos Blancos, bajo la sospecha de que el segundo era un “halcón”.

A las acusaciones sobre la presunta participación de elementos de la Marina en la ejecución de los jóvenes, se sumaron las declaraciones del alcalde de Guasave, quien señaló que este acontecimiento ya había sido comunicado a la secretaria de seguridad, Rosa Icela Rodríguez para que el presidente estuviera enterado. Por su parte, la fiscal general del estado, Sara Bruna Quiñonez Estrada, informó que, como parte de la investigación, se había solicitado a la organización una lista de elementos adscritos a la zona de Guasave, así como sus registros y tipos de armas.

En respuesta a la investigación de la fiscalía general del Estado, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a las demandas de los familiares de las víctimas, la Secretaría de Marina, a través del vicealmirante, Daniel Escobedo Escobedo, manifestó su colaboración y apertura para que los hechos sean investigados, pues, comunicó el vicealmirante, hay evidencia

de que no había presencia de sus elementos en el lugar de los hechos; también presentó una denuncia por el uso de uniformes apócrifos de la Marina por parte de miembros del crimen organizado.

Estos homicidios ocurrieron en uno de los municipios más violentos del estado de Sinaloa en un contexto en el que, si bien la cantidad de víctimas letales del crimen organizado ha decrecido en los últimos años, destaca el perfil de las víctimas por situarse, la mayoría de ellas, en un rango de edad de entre 20 y 30 años (37.4 %), así como la ocurrencia de la mayoría de estos incidentes en la vía pública (22.2%). En este municipio tienen presencia el Cartel de Sinaloa y la Organización Criminal de la Familia Meza Flores, organizaciones rivales.



Considerando el conflicto en curso entre el Cartel de Sinaloa y la Organización Criminal de la Familia Meza Flores, destaca el intento de las organizaciones criminales por involucrar a miembros de la Marina como agentes, ya sea mediante la cooptación o la suplantación de identidad mediante el uso de uniformes apócrifos (o adquiridos de manera ilegal) para eliminar a miembros de bandas rivales y crear confusión y desconfianza en la población.

Algunos posibles efectos derivados de la dinámica criminal y de eventos relevantes como este son una crisis institucional de la Marina en el estado de Sinaloa, como resultado de la penetración del crimen organizado en sus filas y de su capacidad para crear confusión e incertidumbre a partir de la suplantación de identidad. La disputa entre las organizaciones criminales por la protección y cooptación de miembros de las fuerzas armadas podría derivar en más casos como este en el corto plazo. También existe la posibilidad del crecimiento en la región de un movimiento social que exija mayor transparencia por parte de las fuerzas armadas.



Enfrentamiento entre la policía local y un comando armado deja 10 víctimas fatales en Salinas Victoria, Nuevo León

VIOLENCIA CRIMINAL

El pasado 30 de mayo ocurrió un enfrentamiento entre la Fuerza Civil del estado de Nuevo León y un comando armado en la autopista que va de Monterrey a Laredo, cerca de los municipios de Salinas Victoria, a 40 kilómetros al norte de Monterrey. Los policías estatales fueron emboscados: durante la confrontación 10 hombres fueron abatidos por la Fuerza Civil, mientras que cuatro oficiales resultaron lesionados —tres por la volcadura de un vehículo y uno por impacto de bala. Al relatar los hechos, el secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Palacios Pámenes, explicó que la policía estatal consiguió decomisar tres camionetas blindadas y el armamento utilizado por el comando agresor.

- Este evento es tan sólo el último de una serie de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y grupos armados en esta región de Nuevo León. El 8 de marzo, por ejemplo, ocurrió un enfrentamiento similar entre la policía estatal y un comando en el ejido Garza Ayala, municipio de Sabinas Hidalgo, cuando se llevó a cabo la detención de Guillermo “Ñ”. Lo mismo el 3 de enero, cuando un encuentro entre la policía y un comando arrojó un saldo de tres agentes y dos pistoleros fallecidos en Salinas Victoria.

La violencia recurrente en estos municipios se explica en parte por su posición geográfica: las carreteras en donde suelen ocurrir estos incidentes (85 y 85D y local 1) conectan a Monterrey con Nuevo Laredo, Estados Unidos. Sabinas Hidalgo, por ejemplo, se encuentra a sólo 140 km de Nuevo Laredo —dos horas en vehículo— y a 110 km de la capital del estado. Las carreteras a Nuevo Laredo, la “libre” y la “de cuota”, son codiciadas por los grupos criminales debido al constante flujo de personas y mercancías. Las autoridades han registrado las siguientes actividades criminales: robo de mercancía, dinero y vehículos, cobro de peajes, extorsiones, secuestros y asesinatos. Por ello, la carretera ha sido llamada por la gente como “del terror” o “de la muerte”.

- Según datos de Lantia Intelligence, Nuevo León ocupa la treceava posición en el ámbito nacional en el Índice de Riesgo por Crimen Organizado (57.4). Entre el primer trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2023 se han presentado 984 casos de víctimas letales por crimen organizado (165 en el primer trimestre de 2023), de los cuales 467 (47.46%) ocurrieron en alguno de los municipios por donde transita la carretera federal 85D (Sabinas Hidalgo, Salinas Victoria, Ciénaga de Flores, Gral. Zuazua, Vallecillo, Apodaca, Gral. Escobedo, San Nicolás de los Garza, Monterrey, Santiago, Allende, Montemorelos y Linares).
- Advertimos la presencia de grupos criminales en los municipios por donde corre la carretera 85 y 85D hacia Estados Unidos: el Cártel del Noreste, Cártel Independiente de Nuevo León (Salinas Victoria); Banda de El Oca (Gral. Escobedo); Cártel Independiente de Nuevo León (Sabinas Hidalgo y Santiago); Cartel del Noreste, Banda de la Exploración

(Apodaca); Banda de los Rólex, Cártel de Sinaloa, Cártel del Noreste, Cártel Independiente de Nuevo León, Los Bronz, Banda de la Explorer (Monterrey).

En el corto plazo es altamente probable que los episodios de violencia en estos municipios de Nuevo León vuelvan a ocurrir: la “carretera de la muerte” a Nuevo Laredo continuará siendo un espacio inseguro para los transeúntes y atractivo para el crimen organizado. Mientras las autoridades internacionales, federales y locales no se coordinen en la elaboración de una estrategia de seguridad y protección contra estos grupos armados que asaltan las carreteras 85, 85D y local 1, éstas serán rutas comerciales vulnerables al pillaje, y los enfrentamientos con las policías locales continuarán ocurriendo.